

ESTUDIO

EL PROCESO DE MERCADO Y LAS AMENIDADES DEL MEDIO AMBIENTE*

Terry L. Anderson**

Este trabajo se enmarca dentro de una tradición que ha adquirido importancia creciente en la última década y que ha mostrado una honda preocupación por la "extinción" paulatina de los recursos naturales de nuestro planeta. La autora es conservacionista en el sentido de que le interesa contribuir a que dichos recursos sean preservados, pero se aparta radicalmente de lo que han sido las propuestas tradicionales de los conservacionistas. Está convencida de que los mercados, en la presencia de derechos de propiedad bien definidos sobre estos recursos, contribuirán a lograr el objetivo de los conservacionistas en mejor forma que otros ordenamientos institucionales. Se aparta, de este modo, del enfoque tradicional, heredado de Pigou, de que en los casos de sobreexplotación de los recursos naturales se requiere de una intervención del Estado que asegure una explotación

*Publicado originalmente en *Economics and the Environment. A Reconciliation*, Walter Block, editor (Vancouver, B.C.: The Fraser Institute, 1989). Su traducción y reproducción cuentan con la debida autorización.

**Profesora de Economía en Montana State University. Investigadora del Centro de Investigación en Economía Política, en Bozeman, Montana. Ha sido profesora visitante en las universidades de Stanford, Oxford, Basel y Clemson. Autora y coautora de numerosos libros —entre ellos *Water Crisis: Ending the Policy Drought* y *Water Rights*— y de numerosos artículos, varios de los cuales han sido publicados en *The Wall Street Journal*.

"sustentable" de dichos recursos. Su análisis se ilustra con numerosos ejemplos del mundo contemporáneo y se refiere al caso de los caudales de agua y a las especies animales en extinción, entre otros. Su trabajo demuestra que en los casos en los que el mercado "falla" la explicación la podemos encontrar en derechos de propiedad mal definidos, o en costos de transacción excesivamente altos como consecuencia de regulaciones gubernamentales o legislaciones mal concebidas. Los aspectos aquí abordados son de interés en el momento en que Chile se apresta a definir aspectos importantes en materia de legislación ambiental.

Introducción

Ningún otro campo de la economía, con la posible excepción de la organización industrial, se ha centrado tanto en las deficiencias del mercado y en las implicancias de éstas, como lo ha hecho el estudio económico de los recursos naturales. En uno de los textos de estudio más importantes al respecto, Alan Randall afirma lo siguiente:

[L]a economía de los recursos (...) suscita interrogantes acerca de la eficacia de los actuales mercados y estructura institucional en la asignación de los recursos, así como en la satisfacción de las demandas de los individuos de la generación actual y las de las generaciones presentes y futuras) (Randall 1981, p. 42).

En general, los economistas dedicados al estudio de los recursos se han centrado en los problemas de las externalidades y los bienes públicos. En consecuencia, luego se proponen soluciones que requieren de la intervención estatal y se examinan los impuestos, subsidios y normas que mejorarán la eficiencia.

Si partimos de la perspectiva de óptimo de Pareto, la mayoría de los textos de estudio analiza por qué tal óptimo no puede lograrse mediante el proceso de mercado. Charles Howe, por ejemplo, revela lo que él estima conforman un "sinnúmero de razones por las cuales incluso mercados competitivos que cuentan con suficiente información pueden fracasar en su intento por asignar recursos a lo largo del tiempo de la forma socialmente más deseable". Su lista incluye las siguientes razones:

- los mercados privados son propensos a subestimar los valores de los servicios ambientales relacionados con los *stocks* de recursos *in situ*.
- Las tasas de interés privadas suelen ser más altas que las tasas sociales de descuento.
- El acceso común a los recursos *in situ* puede impedir el surgimiento de mercados para estos recursos.
- *Los* futuros ahorros en costos de producción relacionados con el almacenamiento (en el sentido de no explotación) de recursos *in situ* podrían repartirse entre muchos productores en el caso de recursos de propiedad común, lo que haría que los productores ignoraran o subestimaran dichos ahorros (Howe, 1979, p. 103).
- Un monopolio, casi siempre, genera un uso de los recursos en el tiempo bastante distinto al de un mercado competitivo; sin embargo, éste puede encontrarse más cerca de un patrón óptimo que uno de tipo competitivo.

En general, la mayor parte de los argumentos sobre las deficiencias del mercado se centran en la discrepancia entre las tasas de descuento privadas y sociales o entre los precios privados y sociales. Siguiendo la tradición pigouviana, los economistas han tendido a considerar las externalidades como casos generalizados de deficiencia del mercado que requieren de la intervención gubernamental. En el texto que lideraba las aulas universitarias en las décadas de 1960 y 1970, Paul Samuelson afirma:

Siempre que haya externalidades habrá una buena razón para reemplazar el individualismo total por algún tipo de acción grupal (...) El lector podrá pensar en una infinidad (...) de externalidades en las cuales los economistas sugerirán algunas limitaciones a la libertad individual en pro del interés común (Samuelson, 1980, p. 450).

Desde esta perspectiva, ha resultado fácil justificar las intervenciones gubernamentales en lo que se refiere a la asignación de casi todos los recursos naturales, incluyendo la tierra, el aire, la energía, la madera, el agua y la agricultura. Desgraciadamente, "el análisis pigouviano contiene un sesgo implícito hacia las 'soluciones intervencionistas' para las

externalidades en forma de impuestos, subsidios, normas y prohibiciones", ya que éste sugiere que "las externalidades requieren de una acción gubernamental 'correctiva' " (Burton, 1978, p. 90).

Este enfoque ha sido recientemente criticado y desafiado. Estimulados por el artículo "El problema del costo social", de Ronald Coase, los economistas han comenzado a incorporar los derechos de propiedad y los costos de transacción en sus análisis de los procesos de mercado. Este nuevo tipo de economía institucional, especialmente en las áreas de organización industrial, decisiones públicas e historia de la economía, está generando toda una gama de literatura que modifica nuestra manera de considerar al Estado y el papel de éste en el sistema de mercado.

Este trabajo pretende ayudar a ampliar la lista de esas áreas para incluir en ella la economía de los recursos naturales. Algunos economistas están empezando a reconocer la importancia de la nueva economía institucional para el estudio de los recursos naturales; el resultado de ello es un nuevo paradigma de economía de los recursos (véase Anderson, 1982). A continuación ilustraremos brevemente los elementos del nuevo paradigma. Luego, en la tercera parte de este trabajo, daremos ejemplos de cómo la nueva economía institucional puede aplicarse al problema de los recursos. Presentaremos alternativas a las soluciones intervencionistas derivadas del análisis pigouviano y demostraremos que los procesos del mercado pueden contribuir a crear amenidades ambientales.

La nueva economía de los recursos

Al examinar el "mito del costo social", Steven Cheung concluye:

La cuestión es (...) por qué existen las políticas públicas de la manera que están formuladas y por qué varían en los diferentes sistemas económicos. La respuesta a esta pregunta de la interpretación económica del comportamiento político requiere de la comprensión de las restricciones del mundo real relativas a la toma de decisiones por parte del gobierno. Un reciente vuelco en esa dirección y el reconocimiento cada vez mayor de la importancia del análisis de las políticas presagian un nuevo impulso en el desarrollo de la economía, especialmente en lo que se refiere a la organización industrial, las decisiones públicas y la historia de la economía, (Cheung 1978, pp. 67 y 68).

Estas áreas ponen énfasis en las relaciones entre principales y agentes y en los efectos que los costos de transacción tienen en estas relaciones. En consecuencia, los economistas están repensando el concepto de monopolio y reconociendo el comportamiento de las burocracias, preguntándose cómo y por qué cambian las instituciones con el correr del tiempo.

Desde hace aún menos tiempo, los economistas especializados en recursos naturales han comenzado a aplicar a sus análisis la relación entre costo de transacción y derechos de propiedad. Antony Fisher ha captado la esencia del vuelco:

Ya hemos abandonado el supuesto de todo un conjunto de mercados competitivos (...) pero, a mi juicio, si ahora abandonamos de igual modo la noción de un planificador perfecto, no queda claro que el gobierno será capaz de hacerlo mejor. Aparte del problema de la motivación que tenga el planificador para comportarse de la manera que suponen nuestros modelos para asignar los recursos en forma eficiente, también existe el problema de la habilidad necesaria para hacerlo (Fisher, 1981, p. 54).

El nuevo enfoque de la economía institucional le otorga al fracaso gubernamental en la asignación de recursos naturales una atención tan rigurosa, teórica y empíricamente, como la que anteriores intentos en la tradición pigouviana les otorgaban a las deficiencias del mercado. Este enfoque deja en claro que

no basta con comparar el desempeño del mercado, o de algún otro mecanismo distinto del mercado, con una norma "ideal", "óptima" o "teórica" y concluir que éste es inapropiado para propósitos de políticas. El "fracaso" del mercado, en un sentido abstracto, no significa que una alternativa distinta a la del mercado no pueda fallar también en el mismo sentido o en algún otro sentido abstracto (Castle, 1965, p. 552).

El individualismo metodológico

La nueva economía de los recursos comienza con el individuo, especialmente con el empresario. Siguiendo un análisis marginal, los

empresarios buscan situaciones en las que los beneficios marginales superen los costos marginales. A medida que éstos responden a las oportunidades, el sistema se acerca al equilibrio. La pregunta es si las oportunidades que descubren y las acciones que emprenden aumentarán la riqueza de la sociedad o simplemente la redistribuirán.

La respuesta depende solamente de los costos de transacción y de los contratos resultantes. Para que los empresarios enfrenten la totalidad de los costos de oportunidad y cosechen todos los beneficios de sus acciones, debe haber términos contractuales, ya sea explícitos o implícitos, para todos los márgenes relevantes. La asignación de recursos se encuentra determinada por la estructura de los derechos de propiedad y por el costo de especificar, medir y aplicar términos contractuales.

También es importante reconocer que en la medida en que cambian los valores de los recursos y se desarrollan nuevas tecnologías, se especificarán márgenes diferentes en los contratos. Rentas más altas en un recurso inducirán a los empresarios a aceptar costos contractuales que, a valores anteriores, eran demasiado altos. De modo similar, nuevas tecnologías pueden reducir los costos de especificar, medir y aplicar términos contractuales. Ambos fenómenos influyeron en la evolución de los derechos de propiedad en el oeste americano (véase Anderson y Hill, 1975) y ambos están influyendo en la disponibilidad de recreación y de un medio ambiente agradable a través del proceso del mercado.

Cuando los derechos de propiedad no se encuentran bien definidos, y no son exigibles y transferibles, o cuando los costos de transacción son altos, el empresario tiene por lo menos dos oportunidades para aumentar su riqueza. Primero, puede considerar la economía de una propiedad común (*common pool resource*). Cheung (1970) ha demostrado cómo los empresarios enfrentados a un recurso de propiedad común disipan las rentas. Debido a los altos costos de transacción, ciertos impactos marginales no serán la base de los contratos. La explotación de un recurso bajo estas condiciones beneficia al individuo; sin embargo, resulta un juego de suma negativa para la sociedad.

Los empresarios también realizan juegos de suma negativa cuando se involucran en la búsqueda de rentas usando el poder coercitivo del gobierno para aumentar su riqueza personal a costa de otros (Anderson y Hill, 1980). En el contexto de la nueva economía institucional, la búsqueda de rentas significa que los empresarios se esforzarán en elevar los costos de transacción para sus competidores o en redefinir los derechos de propiedad en su favor. Ambas acciones exigen medidas gubernamentales. Con tantas decisiones acerca del uso de los recursos naturales en manos de las

burocracias nacional y local, el juego de obtener ganancias resulta tan importante para los ejecutivos del carbón como para los líderes ambientalistas. Ambos tipos de empresarios reconocen que tanto su propia riqueza como la de sus mandantes se verá afectada por decisiones burocráticas. De este modo, los grupos de interés gastan grandes cantidades de dinero y otros recursos en su afán por influir en estas decisiones.

La búsqueda de rentas

En tanto los esfuerzos empresariales mencionados explican la demanda por la búsqueda de rentas, las actividades de los políticos y de los funcionarios públicos explican la oferta de la misma. Así como los empresarios reconocen y satisfacen la demanda de bienes y servicios en el mercado, los políticos y los funcionarios de gobierno descubren oportunidades para satisfacer las demandas de su electorado. Sin embargo, las restricciones sobre cada uno de ellos son totalmente diferentes. Mediante contratos bien definidos, los empresarios del sector privado otorgan nuevos bienes y servicios sólo cuando consideran que los beneficios que obtendrán de dichos ítemes serán mayores que los costos de oportunidades de los recursos utilizados en la producción de ellos. No obstante, los políticos y los funcionarios públicos que proveen bienes y servicios a grupos de interés no tienen que pagar el costo total de oportunidad de los recursos utilizados. Pueden aumentar sus utilidades incrementando la discreción presupuestaria, el poder y la riqueza.

Existe una relación principal/agente entre políticos y funcionarios públicos por una parte, y votantes por la otra. Pero ésta se ve debilitada por cosas tales como la ignorancia del votante, información deficiente y grupos de interés que elevan los costos de transacción de contratos completamente especificados entre agentes gubernamentales y principales ciudadanos. Si incorporamos estos costos en forma explícita en nuestros modelos, podremos entender mejor cuáles son las situaciones con mayor probabilidad de originar fracasos gubernamentales.

Los economistas de los recursos naturales partidarios de este enfoque se preguntan si los problemas de la asignación pueden resolverse simplemente exigiendo que personeros de gobierno tomen decisiones destinadas a igualar beneficios y costos en el margen. Como lo expresa Friedrich Hayek:

El problema de ningún modo estaría resuelto si pudiésemos demostrar que todos los hechos, aunque fuesen conocidos por una sola persona (...) determinarían de un modo único la solución; en cambio, debemos demostrar cómo una solución se da gracias a la interacción de personas que poseen, cada una de ellas, conocimientos parciales (Hayek, 1972, p. 91).

Desde esta perspectiva, la verdadera pregunta es: ¿cuáles son los márgenes contractuales relevantes y qué valor se les otorgará?

Ciertamente, el nuevo paradigma está ejerciendo gran influencia sobre la economía y las políticas relativas a los recursos naturales, no obstante, establecer una nueva teoría no es suficiente. Si "la contribución de Pigou a la teoría económica de las políticas gubernamentales se basó en teorizaciones más que en investigaciones empíricas" (Burton 1978, p. 72), es importante que la nueva economía de los recursos no caiga en la misma trampa. Las limitaciones que afectan los derechos de propiedad y los costos de transacción asumidos deben ser cuidadosamente analizados para comprobar su validez. Se deben realizar investigaciones empíricas para asegurar que las conclusiones sean verdaderas. La prueba de Coase (1974) de que los faros no constituyen bienes públicos y la investigación de Cheung (1973) de los contratos entre apicultores y dueños de huertos sirven de guía para la realización de este tipo de investigaciones.

El ambientalismo de libre mercado

Aquellos que siguen la tradición pigouviana están dispuestos a aceptar que la solución de algunos problemas pasa por la asignación de derechos de propiedad; no obstante, a menudo argumentan que una solución de ese tipo no serviría para la asignación del agua, de la recreación y de la vida silvestre.

Respecto de porciones de tierra y agua, la extensión de los derechos de propiedad podría internalizar en forma eficaz lo que de otra forma constituiría una serie de externalidades. Sin embargo, las posibilidades de proteger a los ciudadanos de desastres ambientales tan comunes como la suciedad, el humo, el hedor, el ruido, las distracciones visuales, etc., a través del mercado y los derechos de propiedad, son demasiado remotas como para ser consideradas seriamente (Mishan, 1972, p. 62).

Sin embargo, para muchos problemas ambientales pueden surgir, y de hecho surgen, soluciones voluntarias, contractuales. Cuando esto no sucede, puede culparse del fracaso a los costos de transacción. Dichos costos pueden no ser simplemente aquellos asociados con las transacciones corrientes del mercado, sino que pueden ser el resultado de acciones gubernamentales destinadas a corregir la supuesta deficiencia del mercado. Consideremos los siguientes ejemplos de cómo el mercado puede proporcionar un medio ambiente agradable y posibilidades de recreación.

La privatización del uso de caudales

Durante los años en los que se estaban creando los derechos de agua en el oeste de los Estados Unidos casi no había necesidad de considerar quién tenía derechos sobre los caudales (véase Anderson, 1983)). Sin embargo, desde entonces la demanda por el uso de éstos ha aumentado hasta incluir el desecho de residuos, la recreación y el paisaje. La industrialización llevó a la descarga de efluentes en ríos y lagos, en tanto que el aumento de los ingresos y del tiempo libre llevó a un aumento de los valores estéticos.

Como los usos del agua en su cauce comenzaron a competir directamente con los de desviación, la estructura institucional debió ser ajustada para responder a los nuevos valores. Los organismos judiciales y administrativos respondieron instituyendo nuevas normas para el uso de los caudales en su cauce. La razón fundamental estriba en que estos usos constituyen un bien público; es decir, resulta difícil (algunos dicen que imposible) excluir los usos gratuitos, y las unidades adicionales del bien pueden otorgarse a un costo marginal igual a cero. Para hacer todavía más complejo el problema, se argumenta que un valor de existencia puede asociarse a amenidades del caudal; es decir, para algunas personas constituye un motivo de satisfacción el simple hecho de saber que la posibilidad de recreación se encuentra allí. A un neoyorquino puede hacerle feliz saber que en Montana existe un río que fluye libremente, aunque no tenga la intención de verlo alguna vez. Con estos argumentos los legisladores han justificado la intervención gubernamental en lo referente a la asignación del agua. ¿Es necesaria la acción colectiva que se ha utilizado para determinar los usos de caudales, o podría permitírseles a los mercados resolver los conflictos entre los distintos usos?

Si hemos de convencernos de que los mercados pueden ofrecer una alternativa para asignar derechos sobre los caudales, resulta razonable

plantearse por qué los mercados no son más activos en esta área. James Huffman sugiere lo siguiente:

[Las ineficiencias existentes en] la asignación del agua se deben a las deficiencias del sistema de derecho privado más que a supuestas fallas del mercado. Las leyes de agua vigentes limitan seriamente la adquisición por privados de derechos sobre caudales, de modo que no podemos estar seguros, a partir de la experiencia, de que el supuesto inicial de bien público sea exacto (Huffman, 1983, p. 268).

En muchos estados del oeste, la estructura institucional impide la posesión privada de caudales. En algunos casos, el concepto de uso beneficioso (inicialmente utilizado para usos agrícolas, mineros y domésticos) no incluye estos caudales. En los primeros campamentos mineros, el uso beneficioso era determinado por cualquier usuario dispuesto a desviar el agua. Sin embargo, con el correr del tiempo el uso beneficioso está siendo cada vez más determinado por organismos judiciales y administrativos, los cuales han estipulado que reservar caudales para fines de recreación no constituye un uso beneficioso.

El uso beneficioso

La condición de que el uso beneficioso exige la desviación del agua ha provocado resultados altamente negativos. Cuando la legislación de Colorado, por ejemplo, autorizó que el Distrito de Conservación del Río Colorado reservara aguas para mantener un caudal en cualquier cauce natural lo suficientemente grande como para albergar una población de peces, la Corte Suprema del estado de Colorado determinó que,

según la legislación de ese estado, no había base ninguna para suponer que un mínimo flujo de agua en un caudal natural puede ser "apropiado" para propósitos de pesca sin desviar ninguna porción de dicha agua "apropiada" del curso natural del caudal (Huffman 1983, p. 10).

Con bastante anterioridad, en 1917, una Corte de Utah había dictado un fallo en una disputa de posesión de caudales para la protección de una población de patos. La corte consideró que era

absolutamente inconcebible que las leyes de este estado permitan la apropiación válida de agua, cuando el uso beneficioso de ésta, luego de realizada la apropiación, pertenecerá por igual a todos los seres humanos que quieran disfrutar de ella (...) Somos de la opinión que el uso beneficioso considerado para realizar la apropiación debe ser uno que redunde en exclusivo beneficio del apropiador y que esté sujeto a su dominio y control (Lake Shore Duck Club *versus* Lake View Duck Club, 50 Utah 76, 309, 1917).

El estado se mostraba reticente a permitir que individuos o grupos se apropiaran de los derechos sobre los "bienes públicos". En la medida que la mantención de caudales (*instream flows*) no constituya un uso beneficioso del agua, los propietarios privados no podrán definir y aplicar derechos sobre sus flujos. De este modo, el mercado no puede crecer. Una vez más, no se trata de un caso de deficiencia del mercado sino de falla gubernamental o institucional.

La asignación por el mercado también se ve obstaculizada por la práctica corriente en muchos estados de que el propietario de derechos los pierde si el agua no es utilizada. Es decir, si el agua se deja fluir para crear un paisaje agradable o un habitat adecuado para los peces, la ley considera que el recurso se ha abandonado y el derecho sobre él se pierde. El fundamento para esta ley fue que la especulación con el agua hacía que recursos valiosos permanecieran inactivos e improductivos, impidiendo el crecimiento económico.

Debido a que no se puede distinguir entre las aguas que se apropian para propósitos de especulación y aguas que se apropian para uso de sus caudales, estas últimas han caído bajo la ley de abandono. La ley impide el establecimiento de derechos sobre los flujos de agua en cauces naturales y desincentiva lo que podría ser un uso altamente apreciado. Acabar con las restricciones de uso beneficioso y las leyes de abandono eliminaría una barrera institucional para el establecimiento de derechos sobre los caudales de agua y la producción de amenidades valoradas por la población.

Propiedad privada de los caudales

La evidencia sugiere que si se eliminan los obstáculos legales para el establecimiento de derechos sobre los caudales, se desarrollarían arreglos contractuales para la provisión privada de los usos de caudales. En ríos

pequeños por ejemplo, donde no se aplican algunas de las restricciones legales, los propietarios particulares están proveyendo de pesca y obteniendo ganancias. En el valle del río Yellowstone, al sur de Livingston, Montana, varios arroyos comienzan y terminan en propiedades privadas y han sido totalmente apropiados por los dueños de la tierra. Puesto que el acceso a los caudales puede ser vigilado sin mayores costos, los propietarios pueden cobrar una cuota a los pescadores. La cuota incentiva a los propietarios a crear cámaras de desove, prevenir la sedimentación y mantener el ganado alejado de los caudales para proteger la vegetación de la orilla. Los propietarios limitan el número de pescadores diarios, de modo que no disminuya el valor de la experiencia.

Un caso diferente, pero con similares resultados, tuvo lugar en el valle de Gallatin, cerca de Bozeman, Montana. Hace algunos años, un pescador aficionado compró tierras y un río a un ganadero que permitía que sus animales pastaran a la orilla del río, lo que había eliminado la vegetación, causado erosión y reducido el tamaño y el número de truchas. El nuevo propietario se deshizo del ganado y en tres años logró recuperar el caudal y revivir el potencial pesquero del río. Así, el propietario asume el costo de no utilizar la tierra para la crianza de ganado, pero obtiene los beneficios de una mejor pesca.

Los resultados de la propiedad privada de derechos de pesca están siendo considerados en otras partes del mundo. En el Southwest Miramichi River de Quebec, el dueño de un campamento de pesca describe de la siguiente manera cómo convirtió una parte del terreno que arrendaba en un lugar perfecto para pescar salmones:

Lo hice perfecto con la ayuda de un bulldozer (...) Quitamos la barrera de gravilla que impedía que los peces subieran (...) cavamos una piscina de 100 yardas (...) y colocamos un pedrón del porte de una casa (...) Con el debido respeto que merece la Madre Naturaleza, la piscina fue construida por hombres y máquinas, y hoy parece ser tan buena como lo fue el primer año (Zem, 1982, p. 87).

La experiencia británica

En Inglaterra y Escocia, los derechos sobre ríos de pesca abundante han incentivado desde hace mucho los usos de caudales. La tradición de pescar truchas en Gran Bretaña ha llevado a que algunos propietarios

mantengan zonas de pesca aun cuando no hallan comercializado sus derechos de pesca. Sin embargo, al aumentar el valor de los derechos de pesca con la demanda, "existen pocos propietarios (...) que puedan darse el lujo de ignorar el aspecto comercial de los derechos deportivos que poseen" (Southerland, 1968, p. 110). Se ha hecho conveniente incurrir en los costos de especificar y ejecutar arreglos contractuales sobre la pesca. Debido a ello, han surgido varias asociaciones voluntarias privadas para comprar los derechos sobre los caudales y cobrar cuotas de pesca.

Durante los años sesenta y setenta, pequeñas pesquerías privadas, que ofrecían exclusividad a cambio de cuotas más altas, comenzaron a proliferar por todas partes [en Inglaterra]. Actualmente cada ciudad y pueblo importante (...) posee instalaciones de primera clase para la pesca de truchas de fácil acceso a un precio razonable (Clarke, 1979, p. 219).

En Escocia,

prácticamente cada pulgada de los ríos más importantes y la mayoría de los más pequeños son de propiedad privada o están arrendados y, aunque la violación de ellos no es un delito serio como un asesinato en primer grado o alta traición, no se toma a la ligera (...) Muchos de los trechos, que pueden ser de 100 yardas en una orilla del río o de varias millas en ambos lados, se encuentran reservados con años de anticipación con una larga lista de espera (Zern, 1981, pp. 120-136).

En Grantown-on-spey, el pescador de caña puede

formar parte de la asociación local de pesca pagando una cuota semanal de aproximadamente 25 dólares y ser libre de pescar en cualquiera de las siete millas de aguas de la asociación. También, algunas veces, los hoteles y las hosterías poseen o arriendan un trecho de río para sus huéspedes, o hacen otros arreglos con el propietario local de los derechos de pesca (Zern, 1981, pp. 120-136).

Cuando el uso de caudales es de propiedad privada se crea un incentivo para cuidar y mejorar el habitat de pesca. Con el fin de obtener retomos de la inversión, los dueños deben invertir en ejercer sus derechos de

propiedad; de modo que los británicos contratan administradores e invierten en el mejoramiento de sus ríos:

Para mantener sus casas habitables tenían amas de llaves. Para mantener jardines y parques en buen estado, tenían jardineros. Guardabosques para los ciervos y los gallos de bosque. Luego, como cuidadores de todo lo custodiado, tenían porteros para asegurar aún más las cosas. Y, finalmente, fueron los británicos los que debieron inventar lo último en el arte de la mantención: el cuidador de ríos.

Ahora bien, el nombre en sí podría malinterpretarse, como lo han hecho a veces los "cuidadores de ríos" norteamericanos, a los cuales llamamos el "Cuerpo de Ingenieros". No dejar que un río haga lo que debe hacer sería perjudicial para los británicos, como lo sería también para muchos pescadores de caña (Zahner, 1988, p. 16).

El sistema británico ilustra cómo un país puede reestructurar sus mecanismos institucionales para incentivar la propiedad privada de caudales. Con ello, los derechos sobre éstos adquieren un valor que no puede ignorarse. Southerland afirma que sin duda

los derechos deportivos constituyen una amenidad deseable (...) pero se debe recordar que sin una preservación cuidadosa, mucho de ello no existiría. El granjero con buenas intenciones que permite que cualquiera cace en sus tierras y que no hace nada para preservar sus existencias, muy pronto descubrirá que ya no queda casi nada para cazar (...) [S]i él invierte en mejorar sus instalaciones deportivas, sin duda tiene derecho a sacar toda ganancia posible de su empresa. El hecho de que esto dé como resultado el racionamiento del bien a través de los precios no es más deplorable que el hecho de que el lenguado de Dover cueste más que los arenques (Southerland, 1968, pp. 113-114).

La disminución de la contaminación

Incluso la contaminación se puede reducir si se permite que los individuos posean agua dentro de los confines de un río. Bajo estas

condiciones pueden surgir, y surgirán de hecho, leyes de responsabilidad civil. Los propietarios de derechos de pesca en caudales, por ejemplo, podrían llevar a juicio a quien contaminara algún afluente que perjudicara su recurso pesquero. En Inglaterra, la Asociación de Pescadores de Caña (ACA/Angler's Cooperative Association) ha asumido la tarea de vigilar la contaminación:

Desde su establecimiento, ha investigado cerca de 700 casos de contaminación y rara vez ha fracasado en conseguir su disminución o término o compensación por daños, según sea el caso. Los pescadores cuentan con un hecho simple a su favor: cada lugar de pesca en Gran Bretaña, con excepción de las reservas públicas, pertenece a un propietario privado (Dales, 1968, p. 68).

Estos esfuerzos han preservado incluso la pesca de truchas en el río Derwent, que cruza por la ciudad industrial de Derby. La ACA exigió que la ciudad dejara de verter desechos en el río y consiguió un mandato judicial para que la British Electric no continuara vertiendo agua caliente directamente al río. "La ACA también se preocupa (...) de evitar que el barro proveniente de la construcción de una calle o de alguna fosa contamine las corrientes (...) De hecho, este es un buen ejemplo de una forma común de contaminación que nosotros (en Estados Unidos) aceptamos, aunque es definitivamente innecesaria y fácil de evitar" (Dales, 1968, p. 69).

Las leyes estatales que prohíben la propiedad de los caudales impiden que el mercado resuelva los conflictos de uso de éstos. Si se eliminaran estas prohibiciones, probablemente avanzaríamos mucho en la senda hacia el establecimiento de acuerdos privados contractuales para la utilización de las aguas. La existencia de las instituciones británicas que regulan el uso de las aguas, las cuales promueven la pesca de alta calidad y proporcionan a los propietarios un incentivo para evitar la contaminación del caudal, sugiere que los mercados pueden jugar un papel de mayor importancia.

Las especies de peces migratorios y la vida silvestre

Incluso aquellos que coinciden en resolver muchos de los problemas de los recursos naturales a través de los derechos de propiedad, con frecuencia argumentan que en algunos casos tal solución sería prohibitivamente onerosa. John Burton afirma que

la piscicultura, por ejemplo, es tanto técnica como económicamente viable en algunos casos específicos como el de las ostras (y probablemente también en casos de crianza de peces caros como el rodaballo y el lenguado). Sin embargo, establecer derechos de pesca privados sobre las especies migratorias parece ser por ahora técnicamente imposible (Burton, 1978, p. 88).

La suerte de ballenas, tortugas de mar, búfalos, osos pardos y palomas silvestres provee a los ambientalistas de amplias municiones para exigir el control estatal de la asignación de vida silvestre.

Al igual que lo que sucede con los caudales, una de las razones del fracaso del mercado es la restricción legal sobre la propiedad de vida silvestre. Un mandato de la Corte Suprema estableció en el año 1986 la propiedad de los estados sobre la vida silvestre a través de la doctrina de la propiedad estatal. Debido a la virtual extinción de varias especies codiciadas por su piel, parecía que la única alternativa posible era el control estatal de la vida silvestre. Sin embargo, hay casos en los cuales estas leyes han impedido el establecimiento de derechos de propiedad privada y, por consiguiente, las inversiones en la preservación de la vida silvestre. No obstante, existe un número creciente de ejemplos de mercados que responden a las condiciones de escasez en la asignación de estos recursos naturales.

Está a la vista que es posible establecer, técnicamente, derechos privados, incluso para especies de peces migratorios. En Oregon, las empresas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el cultivo de salmones en criaderos artificiales (*hatcheries*), para luego soltarlos al océano. Cuando los salmones abandonan el Criadero Oregon Aqua, éstos son "marcados con un olor químico que los hará volver a esta zona [de liberación] cuando estén listos para desovar" (Nova, p. 8).

Los criaderos privados de salmones no difieren de las instituciones de pesca establecidas por los antiguos indios costeros. Las tribus que habitaban a lo largo de la costa y del río Columbia recogían los peces cuando éstos volvían a sus terrenos de desove limitando así la recolección, de acuerdo a la tradición y a las supersticiones, de modo que siempre había una pesca sustentable. Los recursos no se agotaban al pescar en el océano, sino que se conservaban pescando a medida que los peces volvían a los ríos.

El salmón de propiedad común

Cuando el hombre blanco llegó al Pacífico noreste, el océano se transformó en un recurso de propiedad común a ser explotado por pescadores comerciales y deportivos. Se han realizado esfuerzos para limitar la pesca en alta mar y aumentar la población de salmones mediante el uso de criaderos públicos; sin embargo, aún se invierten muchos recursos para tratar de pescar lo disponible. Se invierten grandes sumas en botes, redes, equipos electrónicos y trabajo, a pesar de que los peces podrían recogerse llevándolos directamente a las fábricas de conserva durante la época de desove. Las estimaciones indican que los gastos podrían superar el valor de los salmones (Higgs, 1982).

El cultivo privado del salmón es una alternativa racional. El único equipo necesario consiste en una escalera de concreto para peces; así, los criaderos de salmón privados recogen aproximadamente el 70 por ciento de las existencias liberadas. El programa se encuentra recién en sus inicios, pero parece ser lucrativo y está contribuyendo a aumentar la población de salmones silvestres.

Las compañías madereras del sur también comienzan a reconocer el potencial de una administración de los recursos que incentive la vida silvestre. En la industria maderera sureña prevalecen los predios privados. Antiguamente los bosques eran explotados principalmente por la madera de pulpa y se le prestaba escasa atención al habitat silvestre. Simplemente no valía la pena incurrir en costos de transacción. Sin embargo, a medida que ha aumentado el valor recreativo de un medio ambiente agradable, empresas como la International Paper Company han comenzado a cambiar. Tanto los venados de cola blanca, los pavos, las liebres, las codornices, las torcazas y otras especies, como también la International Paper Company y los cazadores, comienzan a vislumbrar los beneficios de las nuevas técnicas de gestión. El talado se encuentra limitado y se realiza en forma irregular en pequeñas zonas para minimizar los efectos colaterales. Las napas subterráneas y los drenajes naturales se dejan fluir en los bosques densos de manera que puedan generar alimento y protección. Con el aumento del fósforo a través de las legumbres, el peso de los ciervos y el tamaño de sus cuernos han aumentado.

¿Altruismo? No

Si todo esto representa costos para las empresas ¿por qué lo hacen? Una de las razones es el deseo de mejorar las relaciones públicas. Pero

además, las empresas obtienen la suma de 10 dólares por acre por concepto de derechos de caza. La Cherokee Game Management Area, de 3.500 acres, ubicada en el este de Texas y perteneciente a la International Paper Company, gana anualmente US\$ 6 dólares por acre. En otros estados los permisos varían entre los 50 centavos y 1 dólar por acre, dependiendo de la calidad del predio. Según Richard Starnes, editor de la revista *Outdoor Life* :

[E]n el futuro, las compañías madereras emprenderán el negocio de arriendo de tierras a clubes de cacería, lo que permitirá que administren ellos mismos la explotación de la madera. Esto otorgará a los cazadores la posibilidad de invertir en vida silvestre, a la vez que ayudarán a las compañías a administrar sus tierras (Starnes, 1982, p.11).

El número de clubes de cacería interesados en contratar tierras está aumentando rápidamente. Como informa el *Fishing and Hunting News*:

[A]ctualmente, a medida que el número de cazadores aumenta y el terreno público disponible disminuye, cada vez más deportistas con sentido común dirigen su atención a los clubes de cacería. Es más, la gente ha descubierto que estos cotos de caza constituyen una opción conveniente para guardar la escopeta al finalizar la temporada (Abril de 1982, p. 8).

De costa a costa y de un extremo a otro de Estados Unidos pueden encontrarse clubes que se preocupan de las distintas especies de aves. Los contratos que rigen el uso de las reservas privadas varían según las cuotas que cobran sobre la base del número de aves capturadas, el número de aves liberadas en los campos, los servicios de guías y el monto de las cuotas anuales de socio.

En estos tiempos de tierras cercadas, de un acceso público cada vez más restringido y de crecientes hordas de cazadores, ser socio de una reserva de cacería constituye una garantía absoluta de que usted tendrá un lugar para cazar y un lugar para llevar a sus hijos. Además, no tendrá que perder la mitad del día buscando a un propietario que no le otorgará de inmediato permiso para cazar (...) Las ventajas son una caza mejor, más disparos y un final para cada excursión. ¿Qué más puede pedir un deportista? (*Fishing and Hunting News*, abril de 1982, p. 8).

Obviamente, algunos deportistas comienzan a reconocer que los acuerdos contractuales privados son una alternativa para la provisión pública de vida silvestre.

Cazadores y propietarios de tierras como amigos

Esta alternativa se hace especialmente evidente en Texas, donde más del 85 por ciento de la tierra se encuentra en manos privadas. Los cazadores de ciervos compran derechos de arrendamiento a valores que fluctúan entre 100 y 2.000 dólares por arma para poder cazar en tierras privadas. Las diferencias de precios dependen de la calidad del lugar de caza, la calidad y la cantidad de la caza y de las instalaciones y servicios ofrecidos por el propietario de la tierra. Los tipos de arriendo varían: el 71 por ciento representa arriendos por la temporada de caza de ciervos; el 19 por ciento son arriendos por todo el año; el 5 por ciento son arriendos por el día y 5 por ciento son arriendos de corto plazo. Los valores de arriendos por acre fluctúan entre 25 centavos de dólar y 10 dólares anuales. Taylor, Beattie y Livengood (1980, p. 2) afirman que "los retornos netos provenientes de los arriendos de terrenos para la caza de ciervos igualan o superan los retornos netos anuales de la ganadería en muchas zonas del estado".

El éxito de los cazadores en tierras arrendadas es extremadamente alto en relación a los lugares públicos. En tierras arrendadas cada cazador atrapó 1,16 ciervos durante el año 1978; en cambio en tierras públicas sólo 0,62 ciervos fueron muertos por los cazadores (Livengood, 1979, p. 2).

El rancharo-propietario es responsable por la vida silvestre en sus tierras. Cuando aparece el cazador, éste debe pagar una cantidad para poder cazar en esas tierras (...) [E]l rancharo participa porque gana dinero. Asimismo, si ese rancharo prohíbe la caza en sus tierras, pierde dinero. No se ven muchos acres con un letrero que diga "se prohíbe cazar" (Chambers, 1982, p. 48).

La cooperación entre deportistas y propietarios ha aumentado gracias a los contratos del mercado que obligan a los individuos a considerar costos y beneficios. Aunque muchas veces se presume que "los derechos de propiedad privada no pueden aplicarse en el caso de la pesca, de la vida silvestre y de cualquier otro recurso al cual los economistas hayan dado el nombre de recurso 'natural' " (Cheung, 1973, p. 33), pareciera que dicha hipótesis sólo generará más mitos.

La conservación de las tierras privadas

Abundan los argumentos a favor de la intervención del Estado en lo que respecta a la conservación en general y a la conservación de tierras en particular. Dichos argumentos se basan en la capacidad de exclusión y en la divergencia entre tasas de descuento privadas y sociales. "La clara labor del gobierno, el que cumple el papel de guardián de las generaciones futuras y presentes, consiste en vigilar y, si fuera necesario, aplicar acciones legales para defender los recursos naturales no renovables de la explotación precipitada y desconsiderada" (A. C. Pigou, citado en Milliman, 1962, p. 199.)

En el caso de la tierra, la exigencia de una acción gubernamental se ve reforzada aún más por la afirmación de que la información del mercado no refleja con claridad el valor futuro de la producción agrícola. El Estudio Nacional de Tierras Agrícolas (National Agricultural Land Survey) pretende demostrar que anualmente en los Estados Unidos más de 3 millones de acres de tierras de cultivo son destinados a otros usos. Esto ha proporcionado a los conservacionistas un arma para presionar aún más en sus exigencias por una legislación diseñada para conservar las tierras agrícolas (Badén, 1983). Desde fines del siglo XIX se han utilizado los mismos argumentos para justificar la propiedad estatal de la tercera parte de las tierras estadounidenses. Supuestamente, todos los parques nacionales, las reservas naturales y lugares históricos caen en la categoría de imperfección del mercado. Sobre esta base se han construido enormes imperios burocráticos.

Examinemos las opciones para la preservación privada de la tierra dejando de lado la cuestión de si los propietarios actuales serán capaces de proveer la necesaria conservación de las tierras o si el gobierno puede hacerlo mejor (véase Badén y Stroup, 1981).

El estudio económico de la conservación de las tierras está pasando por una época de cambios. En el pasado, la mayor parte de la actividad relacionada con la conservación de la tierra se centraba en la transferencia de tierras del sector privado al sector público y en la clasificación de las tierras públicas en categorías protegidas (parques nacionales, áreas silvestres y autóctonas, monumentos, etc.). En la situación actual de equilibrio de los presupuestos nacionales, el dinero para la adquisición de tierras es cada vez más escaso, y el gobierno federal está incentivando el desarrollo de los recursos en las tierras fiscales. Dejando de lado el asunto de la pugna por el manejo público de las tierras, las estrategias del movimiento para la conservación de la tierra se están adaptando, por cuanto dirigen vez cada vez

más su atención hacia el sector privado en busca de apoyo y acciones (Rusmore, 1982, p. 87).

The Nature Conservancy

Esta adaptación ha sido liderada, a nivel nacional, por The Nature Conservancy, "una organización nacional para la conservación, dedicada a preservar la diversidad natural a través de la búsqueda y protección de áreas que poseen los mejores ejemplares de todos los componentes del mundo natural. Desde 1950 Conservancy y sus miembros se han preocupado de la preservación de casi 2 millones de acres en 50 estados, las Islas Vírgenes, Canadá y el Caribe". (*The Nature Conservancy News*, 1983, p. 3).

En el año 1982 esta organización poseía más de 261 millones de dólares en bienes; de éstos, casi 190 millones correspondían a áreas de tierras naturales. A fines de 1982 la cartera de inversiones de Conservancy incluía 689 propiedades, un fondo permanente de capital de 49,5 millones de dólares y 3.098 proyectos de conservación de tierras, lo que comprendía más de 1,9 millón de acres.

A nivel local, las organizaciones para la conservación de las tierras, que en su mayoría utilizan aportes voluntarios y fondos privados, han aumentado rápidamente durante las últimas tres décadas. En 1950 sólo existían en Estados Unidos 36 organizaciones para la conservación. En 1975 había 173 y en 1982 existían 404 grupos que representaban a más de 250.000 miembros. En 1982, las organizaciones locales de conservación controlaban más de 675.000 acres de tierras con recursos valiosos; más del 60 por ciento de ellas ubicadas en Nueva Inglaterra y en los estados del Atlántico central, en los cuales predomina la propiedad privada.

Las sociedades para la conservación se establecen generalmente libres de impuestos; el propósito de ellas es preservar las tierras por su valor recreativo y mantenerlas para el uso agrícola. Los fondos se obtienen pidiendo a los miembros pequeñas cuotas anuales y solicitando donaciones que a veces alcanzan cientos de miles de dólares a fundaciones y empresas. Con estos fondos las sociedades pueden adquirir cuotas que simplemente dan derecho a las tierras o bien pueden comprar servidumbres de conservación. Además, las sociedades consideran que "dadas las inclinaciones morales y gracias a los incentivos tributarios, algunos (...) propietarios [privados] están comprometiendo sus propiedades para propósitos conservacionistas" (Rusmore, 1982, p. 187).

Incentivos tributarios

Los incentivos tributarios son de gran importancia para las organizaciones de conservación, puesto que los individuos pueden deducirlos de sus contribuciones como donaciones caritativas. Quienes aportan servidumbres de conservación a estas organizaciones también pueden deducir la diferencia entre el valor de la tierra sin el aporte (el valor de desarrollo) y el valor con el aporte (valor de conservación). Estas "ofertas constituyen una de las formas más eficientes a través de las cuales la [Nature] Conservancy puede 'husmear' libremente en las tierras que desea" (Wood, 1978, p. 79). Se podría argumentar que los contratos conservacionistas entre organizaciones privadas y propietarios realmente son incentivados por el gobierno, ya que dichos contratos dependen en gran medida de los incentivos tributarios. Sin embargo, si consideramos las instituciones tributarias como algo dado, los "salvadores de 'terno y corbata' de la deteriorada vida silvestre nacional" (Wood, 1978), constituyen claramente una respuesta privada a la provisión de valores de recreación y de un medio ambiente agradable.

Las organizaciones conservacionistas tienden a manejar las tierras en forma distinta a los funcionarios públicos; incluso el canje de tierra es frecuente. Por ejemplo, cuando la Nature Conservancy decidió que las tierras que le habían sido otorgadas en las Islas Vírgenes no eran de una importancia primordial, las intercambió por tierras en Wisconsin, las que podían administrarse como cuenca integrada para propósitos recreativos. Aunque las organizaciones conservacionistas adolecen, sin lugar a dudas, de algunos de los problemas que afectan a toda organización sin fines de lucro, existen algunos elementos importantes de demanda residual.

Las sociedades para la conservación de tierras tampoco se oponen a cobrar cuotas de uso a las personas que obtienen beneficios de sus tierras. Puesto que estas organizaciones no pueden utilizar fácilmente fondos públicos, continuamente buscan formas innovadoras para financiar proyectos. Gordon Abbot Jr., en representación de los guardianes de reservaciones en Massachusetts, afirma lo siguiente:

[T]ambién somos afortunados de que las exigencias de los usuarios nos permitan reunir el 35 por ciento de nuestros ingresos de operación de las cuotas de admisión y de que éstas puedan ser modificadas fácilmente para compensar la inflación. Creemos firmemente en que es justo que los usuarios paguen su parte (Abbot, 1982, p. 207).

Las cuotas de los usuarios

Se cobra por todo, desde el estacionamiento hasta el acceso; así se demuestra que a cierto costo es posible excluir a quienes no están dispuestos a pagar por el consumo de recreación y por un medio ambiente agradable. A medida que los valores de recreación aumentan, las organizaciones descubren la conveniencia de afrontar los gastos de exclusión en un esfuerzo para obtener fondos. Estas organizaciones también se ven incentivadas a cobrar cuotas, las que luego pueden reinvertir. Esto contrasta severamente con la política del Servicio de Parques Nacionales, que ha mantenido las cuotas de acceso en términos reales a un valor inferior al de los años previos a 1920.

No hay duda de que "el sector privado está demostrando ser un aliado formidable" (Rusmore, 1982, p. 187) para el movimiento conservacionista, como lo expresa un dirigente de la New Jersey Conservation Foundation:

"[A] hora nos damos cuenta de que hemos ingresado a una área en la que el gobierno no puede solucionar todos nuestros problemas y que las soluciones que provienen del sector privado ofrecen mayor eficiencia y flexibilidad en el ámbito económico" (Moore, 1982, p. 213).

Con los recortes presupuestarios que realiza el gobierno federal en los programas de adquisición de tierras, la gente se está volcando más hacia el sector privado para generar un entorno agradable. Aun cuando algunas de estas organizaciones enfrentan el problema de los *free-riders* han conseguido grandes sumas de dinero y descubierto maneras para sobrellevar, al menos en forma parcial, las dificultades. No es probable que las organizaciones en cuestión puedan lograr, a través de programas de compra total, lo que logran los organismos gubernamentales; no obstante, pueden "contener en forma significativa las amenazas de daño a (...) áreas críticas" (Rusmore, 1982, p. 219). Un vez más, se demuestra que no es cierto que "proteger a los ciudadanos contra desastres ambientales tan comunes como la suciedad, el humo, la hediondez, el ruido, la contaminación visual, etc. a través del mercado y del derecho de propiedad, sea algo demasiado remoto como para ser tomado en serio" (Mishan, 1972, p. 62).

Conclusiones

El profesor Cheung ha expresado que conviene descartar el concepto de externalidades en favor de un análisis contractual.

El cambio de perspectiva a través del análisis de contratación no constituye una forma redundante de tratar la misma clase de problemas, ya que este cambio de perspectiva conduce a interrogantes (...) diferentes. ¿Por qué no existen los contratos de mercado para ciertos efectos de algunas acciones? ¿Debido a la ausencia de derechos exclusivos o debido a que los costos de transacción son prohibitivos? ¿Por qué no existen derechos exclusivos para ciertas acciones? ¿Debido a las instituciones legales o debido a que los costos de supervisión resultan prohibitivos? (Cheung, 1970, p. 58).

Por cierto existen pruebas suficientes de que el enfoque de las externalidades propuesto por Pigou no nos ha hecho avanzar mucho en lo referido a la comprensión de la asignación de los recursos naturales. Básicamente ha proporcionado argumentos en favor de la intervención gubernamental. Por otra parte, el enfoque del costo de transacción de los derechos de propiedad que propone Cheung nos ayuda a identificar los márgenes relevantes para decidir respecto de la asignación de recursos naturales. Si observamos el proceso real de mercado, por ejemplo el proceso contractual, descubriremos con frecuencia que los efectos externos pueden negarse a través de un contrato. Es más, si preguntamos por qué los contratos no consideran las externalidades, nos veremos forzados a examinar todos los costos de transacción, incluso las restricciones gubernamentales. Los tres usos de recursos naturales analizados en este trabajo revelan que en algunos casos los procesos contractuales sí están funcionando. En otros, al parecer, que las restricciones legales impiden la contratación.

Orientaciones contractuales

El nuevo enfoque de economía institucional establece dos orientaciones importantes para el estudio de los recursos naturales. En primer lugar, se debe prestar más atención a la naturaleza de los contratos existentes. En el caso de las cuotas de caza, por ejemplo, se deben hacer varias preguntas respecto de los precios, especificaciones de productos,

duración del contrato y cláusulas de exclusión. Sólo un análisis tal es capaz de exponer los verdaderos costos de transacción que determinan qué márgenes serán de importancia para las personas encargadas de tomar decisiones. Los economistas dedicados a los recursos naturales recién comienzan a girar en esa dirección.

En segundo lugar, la economía de los recursos naturales debe desarrollar líneas más claras de pensamiento acerca del problema de los *free-riders*. Los grupos ambientalistas en general, y en particular las organizaciones para la conservación de la tierra, parecen estar resolviendo en buena parte este problema. Esto me hace pensar una vez más que la naturaleza de los contratos reviste gran importancia. Lo que los economistas consideran como *situaciones free-riders* podrían ser simples mitos.

Como señala Douglas North, "los códigos éticos y morales de una sociedad son el fundamento de la estabilidad social que hace viable un sistema económico" (1981, p. 47). El enfoque de costos de derechos de propiedad *versus* costos de transacción dirige la atención al efecto que ese "fundamento" ejerce sobre la naturaleza de los procesos contractuales. Si centramos nuestra atención en la naturaleza de los contratos y los costos de transacción, seremos capaces de entender mejor la relación entre los procesos de mercado y un medio ambiente agradable.

Referencias bibliográficas

- Abbot, Gordon Jr. "Long-Term Management: Problems and Opportunities". En *Private Options: Tools and Concepts for Land Conservation*, Barbara Rusmore, Alexandra Swaney y Allan D. Spader (eds.). Covello, California: Island Press, 1982.
- Anderson, Terry L. "The New Resource Economics: Old Ideas and New Applications". *American Journal of Agricultural Economic*. Vol. 64, diciembre de 1982, pp. 928-934.
- _____. *Water Crisis: Ending the Policy Drought*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1983.
- Anderson, Terry L. y Peter J. Hill. *The Birth of a Transfer Society*. Stanford, California: Hoover Institution Press, 1980.
- _____. "The Evolution of Property Rights: A Study of the American West". *Journal of Law Economics*. Vol. 18, abril de 1975, pp. 163-180.

- Baden, John (ed.). "Agricultural Land Preservation: Economics or Politics?". Bozeman, Montana: Center for Political Economy and Natural Resources, 1983.
- Badén, John y Richard Stroup (eds.). *Bureaucracy vs. Environment*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981.
- Bremer, Terry. "A Review of the 1981 National Survey of Local Land Conservation Organizations", en *Private Options: Tools and Concepts for Land Conservation*. Barbara Rusmore, Alexandra Swaney y Alian D. Spader (eds.). Covello, California: Island Press, 1982.
- Burton, John. "Epilog". En *The Myth of Social Costs*, de Steven N.S. Cheung. Londres: The Institute of Economic Affairs, 1978.
- Castle, Emery N. "The Market Mechanism, Externalities, and Land Economics". *Journal of Farm Economics*. Vol. 47, agosto de 1965, pp. 524-556.
- Chambers, Gale. "Cattle and Wildlife - Managing For Both". *Montana Farmer-Stockmen*, enero de 1982, p. 48.
- Cheung, Steven N.S. "The Fable of Bess". *Journal of Law and Economics*. Vol. 16, abril de 1973, pp. 11-34.
- _____. *The Myth of Social Costs*. Londres: The Institute of Economic Affairs, 1978.
- _____. "The Structure of a Contract and the Theory of Non Exclusive Resource". *Journal of Law and Economics*. Vol. 13, abril de 1970. pp. 49-70.
- Clarke, Brian. "The Nymph in Still Water". En *The Masters of Nymph*, J. M. Migel y L. M. Wright (eds.). Nueva York: Nick Lyons Books, 1979.
- Coase, Ronald H. "The Lighthouse in Economics". *Journal of Law and Economics*. Vol. 17, octubre de 1974, pp. 357-376.
- _____. "The Problem of Social Cost". *Journal of Law and Economics*. Vol. 3, octubre de 1960, pp. 1-44.
- Dales, J. H. *Pollution, Property and Prices*. Toronto: University of Toronto Press, 1968.

- Fisher, Antony C. *Resources and Environmental Economics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Fishing and Hunting News*. "Private Clubs Provide Choice Shooting", abril de 1982. p. 8.
- Hayek, Friedrich A. "The Use of Knowledge in Society". En *Individualism and Economic Order*. Chicago: Henry Regnery, 1972.
- Higgs, Roberts. "Legally Induced Technical Regress in the Washington Salmón Fishery". *Research in Economic History* N° 7, 1982, pp. 55-86.
- Howe, Charles W. *Natural Resource Economics*. Nueva York: John Wiley and Sons, 1979.
- Huffman, James. "Instream Water Use: Public and Private Alternatives". En *Water Rights: Scarce Resource Allocation Bureaucracy and the Environment*, Terry L. Anderson (ed). Cambridge, Massachussetts: Ballinger Press, 1983.
- Livengood, Kerry R. "A Comparison of Market and Extra Market Methods of Estimating the Demand and Benefits of Outdoor Recreation". Cátedra para optar el título de Doctor en Filosofía, College Station, Texas A&M University, 1979.
- Milliman, J. W. "Can People Be Trusted With Natural Resources"? *Land Economics*. Vol. 38, agosto de 1962, pp. 199-218.
- Mishan, E. J. "A Reply to Professor Worcester". *Journal of Economic Literature*. Vol. 10, marzo de 1972, pp. 59-62.
- Moore, David. "Adapting the British Countryside Commission Ideas". En *Private Options: Tools and Concepts for Land Conservation*, Barbara Rusmore. Alexandra Swaney y Alian D. Spader (eds.). Cavello, California: Island Press, 1982.
- The Nature Conservancy. "Annual Report, 1983". *The Nature Conservancy News*, N° 33, marzo-abril de 1983.
- North, Douglass C. *Structure and Change in Economic History*. Nueva York: W. W. Norton and Company, 1981.

Nova. "Salmon on the Run". WGBH Publications and Films/Video Services, sin fecha.

Randall, Alan. *Resource Economics*. Columbus, Ohio: Grid Publishing, 1981.

Rusmore, Barbara, "Economic Perspectives on Land Conservation". En *Private Options: Tools and Concepts for Land Conservation*, Barbara Rusmore, Alexandra Swaney y Allan D. Spader (eds.). Covello, California: Island Press, 1982.

Rusmore, Barbara. Alexandra Swaney y Allan D. Spader (eds.). *Private Options: Tools and Concepts for Land Conservation*. Covello, California: Island Press, 1982.

Samuelson, Paul A. *Economics*. Undécima edición. Nueva York: McGraw-Hill, 1980.

Starnes, Richard. "International Paper Has a Grand Plan". *Outdoor Life*, enero de 1982, pp. 11-12.

Southerland, Douglas. *The Landowner*. Londres: Anthony Bond, 1968.

Taylor, C. Robert, Bruce Beattie, y Kerry R. Livengood. "Public vs. Private Systems for Big Game Hunting". Documento presentado a la conferencia sobre Derechos de Propiedad y Recursos Naturales: Un Nuevo Paradigma para el Movimiento Ambientalista, Center for Political Economy and Natural Resources, Bozeman, Montana, diciembre de 1980.

Wood, Peter. "Business-suited Savors of Nations's Vanishing Wilds". *Smithsonian*, N° 9, diciembre de 1978, pp. 76-84.

Zahner, Don. "Anglish Spoken Here". *Fly Fisherman*, N° 12, enero de 1980, p. 16.

Zern, Ed. "By Yon Bonny Banks". *Field and Stream*, (1981), pp. 120, 136-137.

_____. "RX For Ailing Waters". *Field and Stream*, noviembre de 1982, pp. 87-89. □